

Santiago, tres de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió la demanda, declaró que no se cumplió con la conciliación de 15 de mayo de 2018, en la causa RIT S-18-2021, del Juzgado del Trabajo de San Bernardo, y condenó al pago de la suma de \$6.120.000, por cuotas sindicales adeudadas y una multa de 13.301,5 Unidades de Fomento, a favor del sindicato demandante.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste, en *“Determinar la recta interpretación del artículo 1535 del Código Civil, en orden a ponderar la existencia o no de un incumplimiento; luego, en el caso de existir éste, si tal incumplimiento fue total y absoluto, la entidad de la sanción y, por último, la concurrencia de la mala fe en obrar, sin dejar de lado el enriquecimiento ilícito que puede significar la aplicación de una multa de tal magnitud que no guarda correlación alguna con la presunta deuda”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Talca, en la causa Rol N°393-2022, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en las causas Roles N°3480-021 y N°1611-2020, y por la Corte de Apelaciones de Chillán, en la causa Rol N°201-2023.



En la primera, segunda y tercera, considerando que se pactaron cláusulas penales para el caso de no pago o retardo en el cumplimiento de una obligación, se concluyó que eran desproporcionadas o improcedentes, en comparación con el exiguo retraso en el cumplimiento, es decir, uno, tres y cinco días, después de su vencimiento, el que no era suficiente para causar perjuicios a la ejecutante, por lo que el cobro de la totalidad de la cláusula penal constituiría un comportamiento abusivo y contrario a la buena fe. La cuarta, sobre la base que el pago de un avenimiento se produjo dentro del plazo, pero con un cheque cuyo pago fue rechazado por firma disconforme, concluyó que el incumplimiento debe ser inmotivado, injustificado u obedecer a la mala fe del empleador, eliminando la posibilidad de incurrir en interpretaciones abusivas de las cláusulas establecidas en un avenimiento.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia recurrida rechazó el arbitrio, fundado en las causales de nulidad dispuestas en los artículos 478 e), en subsidio, 477 y, subsidiariamente, 478 b) del Código del Trabajo. Con relación a la primera, arguyó que los reproches de la recurrente, si bien enuncian la falta de valoración de toda la prueba rendida, en definitiva, solo se refieren a las liquidaciones de remuneraciones, registros de asistencia, licencias médicas y registros históricos de siniestros. Pues bien, señaló, de la lectura del fallo impugnado se advierte que es posible seguir el razonamiento, sin que existan lagunas o saltos lógicos en el mismo, máxime si el recurso contiene exposiciones generales que no explican el vicio o error. En efecto, el vicio denunciado debe ser demostrado por quien lo alega y no es un recurso de mérito, como la apelación, en este caso, es el tribunal de alzada el que debe revisar si la sentencia está bien fundada, en cuanto a los hechos y al derecho, lo que en el presente caso, se cumplió a cabalidad, por cuanto de su lectura, en especial de sus fundamentos sexto a noveno, se advierte que contiene el análisis de la prueba rendida en la audiencia de juicio, conforme al principio de inmediación, ponderando los medios de convicción para hacerse cargo de las alegaciones de las partes, llegando a las consideraciones que le sirvieron de base para establecer las proposiciones fácticas acreditadas y alcanzar la conclusión final. Se analizó el acuerdo conciliatorio arribado por las partes cuyo incumplimiento se demanda, además, el informe pericial y la confesional del representante de la empresa, teniendo en consideración que la demandada en la contestación no controvertió los montos a que hace referencia la demandante, sino que justifica los descuentos, alegando que no hay mala fe en su realización. En este caso, advirtió, la prueba rendida fue debidamente ponderada, en especial, el peritaje, elaborado conforme al orden de prelación que establece el artículo 58 del Código del Trabajo, concluyendo que no se respetó por el empleador el ítem



denominado sobregiros, lo que, además, fue reconocido expresamente en la confesional del representante de la demandada, al sostener que en la empresa la política es dar preferencia a la imputación al pago de las remuneraciones a los préstamos o deudas que los trabajadores tengan con ésta, por sobre el descuento de las cuotas sindicales. Tales medios de prueba permitieron a la sentenciadora arribar a la conclusión que la demandada incumplió el acuerdo conciliatorio que suscribió con la demandante en la causa RIT S-2-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, en especial, constató la infracción de la cláusula primera, esto es, en cumplir estrictamente con las fechas de pago que establece la ley respecto a las cuotas sindicales, hasta el día 13 de cada mes, determinando que efectuó descuentos en forma indebida y con infracción del artículo 58 del Código del Trabajo, ya que hizo prevalecer deudas con su parte por sobre el descuento de las cuotas sindicales.

Agregó que, respecto de la documental que la demandada echa en falta, la sentencia desestimó las demás pruebas rendidas por no alterar lo resuelto. Por tanto, existan o no las omisiones denunciadas, lo cierto es que no tienen ninguna influencia en lo dispositivo del fallo. Lo anterior es relevante desde que la ley exige la existencia de un perjuicio para que sea procedente y por ello se usa la expresión sustancialmente o influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Es decir, requiere que la omisión denunciada tenga un alcance o importancia decisiva, en términos que el razonamiento probatorio, ausente o equivocado, debe ser capaz de cambiar la decisión adoptada por la jueza, lo que no se vislumbra en esta causa.

A mayor abundamiento, conforme al texto del recurso, señaló, más bien se cuestiona la aplicación del orden de prelación establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo, desde que, a su entender en este caso no corresponde realizar descuentos por cuotas sindicales a las remuneraciones de los trabajadores. En efecto, si bien la recurrente menciona como omitido el análisis de parte de la prueba, se desprende patentemente que el fundamento de la causal de nulidad invocada se sustenta en la aplicación de lo dispuesto en la norma antes citada y ello implica una defectuosa construcción del recurso, desde que se confunden argumentos de hecho, relativos a la falta de valoración de algunos medios de prueba, con alegaciones de derecho, como el orden de prelación de los descuentos que el empleador debe hacer de las remuneraciones. Así las cosas, es dable colegir que el fundamento de la causal de nulidad invocada diría relación más bien con la prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis infracción de ley.



Respecto de la segunda causal, de infracción de ley, concluyó que constituyen hechos de la causa y, por tanto, son inamovibles, los siguientes:

1. La Inspección Provincial del Trabajo del Maipo denunció a la demandada en la causa S-2-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, en la cual se llegó a una conciliación en los siguientes términos: Las partes llegan a la siguiente conciliación: PRIMERO: Obligaciones de la denunciada: La parte denunciada SUBUS CHILE S.A., con el solo objeto de poner término al juicio y sin reconocer ninguno de los hechos expuestos en la demanda, contrae las siguientes obligaciones: (2). Pagar una multa de 18,5 Unidades de Fomento, por día de atraso en el pago de las cuotas sindicales, en beneficio del Sindicato Empresa de Trabajadores San José.
2. El grupo de trabajadores que presenta el mayor tiempo de atraso en el pago de las cuotas sindicales son seis, desde el mes de octubre de 2019 en adelante, lo que equivale a 719 días de atraso a la fecha de interposición de la demanda, que fue el 29 de octubre de 2021.

Así, indicó, en el considerando noveno del fallo recurrido, analizando el acuerdo conciliatorio y habiendo dado por probado que se incurrió en atrasos en el pago de las cuotas sindicales, concluyó que: “[p]rocede la aplicación de la multa, pero no en el quantum que pretende la demandada que la determina por día respecto de cada uno de los trabajadores, lo que tampoco se corresponde con el tenor de la cláusula en cuestión, sino que debe acotarse al incumplimiento general y, en este sentido, se debe atender al retraso respecto del trabajador o grupo de trabajadores que presente el mayor tiempo de atraso y desde ese momento aplicar la multa, siendo en este caso, y según la nómina acompañada por la demandante y que en lo pertinente se transcribe corresponde a seis trabajadores del mes de octubre de 2019 en adelante, equivalentes a 719 días de atraso a la fecha de interposición de la demanda, el día 29 de octubre de 2021, lo que arroja una cifra de 13.301, 5 Unidades de Fomento, que será el monto que se establecerá en definitiva”.

En consecuencia, sostuvo, no solo no existe error en la determinación de la procedencia de la multa pactada por las partes, sino que, además, no puede haber infracción a las normas legales denunciadas en el presente arbitrio de nulidad, pues, en este caso concreto, el sustrato fáctico fijado en la sentencia, que no puede modificarse, debe ser respetado en la causal alegada. Así las cosas, lo pretendido por el recurrente escapa del ámbito de aplicación de esta causal, desde que no se observa una infracción de las normas indicadas en el libelo de nulidad, sino que, el recurso se construyó en contra de los hechos, por lo que no



puede prosperar. En efecto, en definitiva, sostuvo, lo que se advierte es que quien impugna se limita a discrepar del fallo y a formular su propia interpretación de una obligación que fue pactada voluntariamente por las partes y que consta en la cláusula segunda del acuerdo conciliatorio.

En lo relativo a la tercera causal, señaló, que de la lectura del recurso, se advierte que simplemente se hace alusión a las reglas de la sana crítica de forma más bien genérica, solo mencionando el principio de no contradicción y de la razón suficiente, lo que no permite darle contenido en cuanto a de qué forma el razonamiento asentado en la sentencia infringiría alguna regla de la sana crítica, tampoco indica cuál es el hecho que estaría mal fijado y, de qué forma ese hecho impugnado infringiría alguna de dichas reglas, ni se refiere a la incidencia que ello tendría en la decisión probatoria cuestionada. Por tanto, se puede colegir del arbitrio presentado que la impugnante se limita a discrepar del fallo y, en consecuencia, se denota que formula su propia apreciación de los medios de prueba, en especial de la cláusula primera de la conciliación, criticando el raciocinio valorativo que hace la jueza de instancia, la que, hizo uso de su facultad privativa de valorar la prueba, atribución que la ley no le concede al litigante.

Sexto: Que, como se indicó, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustentan los fallos de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna se funda en que no existe un error en la procedencia de la multa pactada por las partes ante el incumplimiento de la conciliación para el pago de las cuotas sindicales adeudadas por la empresa, dado el atraso, que corresponde para seis trabajadores a 719 días a la fecha de interposición de la demanda, mientras que los pronunciamientos contenidos en las sentencias que fueron acompañadas se sustentan en un



razonamiento distinto, afincado en exigüos atrasos en el pago, únicamente de hasta 5 días máximo o que el incumplimiento de la obligación estuvo en un hecho que no dependió del empleador, como lo fue que se haya declarado el cheque para el pago con firma disconforme.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumentos para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

N°57.581-24.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, tres de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a tres de enero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

